

Gobierno de Giorgia Meloni utiliza demandas por difamación para acallar a intelectuales en Italia, según filósofa demandada por cuñado del primer ministro

El gobierno de Giorgia Meloni está haciendo un uso estratégico de las demandas por difamación para acallar a los intelectuales públicos, alegó una filósofa demandada por el cuñado del primer ministro italiano.

En la última de una serie de demandas que aprovechan las leyes de difamación particularmente duras de Italia, Donatella Di Cesare de la Universidad de La Sapienza en Roma comparecerá en un tribunal criminal de la capital italiana el 15 de mayo, después de una denuncia presentada por el ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, por comentarios que comparó con "Mein Kampf" de Hitler.

Lollobrigida, quien está casado con la hermana de Meloni y se considera uno de los aliados más cercanos del primer ministro, provocó controversia en abril de 2024 cuando en una conferencia de un sindicato llamó a no "rendirse a la idea de reemplazo étnico", que describió como "los italianos tienen menos hijos, los reemplazamos con alguien más".

El juicio gira en torno a comentarios que hizo Di Cesare el mismo día en el programa DiMartedì en los que percibió connotaciones de supremacía blanca en el término "reemplazo étnico", diciendo que podía encontrarse en las páginas de "Mein Kampf" y en la ideología del Nacional Socialismo.

La filósofa, quien ha escrito libros sobre continuidades entre el pensamiento nazi y las teorías conspirativas modernas, dijo que Lollobrigida habló "como un *gauleiter*", un líder regional del partido de Hitler.

En su denuncia penal, Lollobrigida dijo que Di Cesare lo había representado como "un nazi que glorifica los campos de concentración y aboga por los campos de exterminio como una solución a los problemas de inmigración", lo que es "no solo difamatorio sino también vergonzoso".

"No logro entender cómo mis palabras podrían siquiera remotamente asemejarse al Mein Kampf de Adolf Hitler", dijo el ministro. Los comentarios de Di Cesare, continuó, estaban "solo motivados por destruir a una persona y difamar tanto a mí como a mis asociados".

Di Cesare, de 67 años, dijo que sus comentarios no estaban destinados a ser una difamación sino como crítica política. "Dije que Lollobrigida habló como un *gauleiter*, no que lo fuera", le dijo al Guardián. "Lo que estamos viendo aquí son procedimientos legales contra una comparación histórica".

Ella dijo que creía que los procedimientos legales formaban parte de una estrategia política. "El objetivo de los juicios por difamación como el mío no es solo intimidar, sino empujar a los intelectuales de izquierda fuera del discurso público", dijo. "Meloni ha estado muy ansiosa por darle al movimiento posfascista una nueva cara más aceptable. A los que llaman la atención sobre las raíces fascistas del movimiento se les está castigando".

Meloni y Lollobrigida no respondieron a las solicitudes de comentarios para este artículo.

La difamación en Italia se puede probar en tribunales civiles o penales. En el último, el delito de difamación agravada se puede encontrar punible por seis años de cárcel, la sentencia más dura de este tipo en la UE después de Eslovaquia, donde puede conducir a sentencias de cárcel de siete años.

Se decidirá en una audiencia judicial en Roma el 15 de mayo si el caso de Di Cesare se

resolverá en un tribunal civil o penal.

Durante el primer año de Meloni en el poder en Italia, Europa tuvo el número más alto de demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) presentadas en el país, según un estudio reciente del comité de libertades civiles, justicia y asuntos interiores (LIBE) del Parlamento Europeo.

En paralelo al caso contra Di Cesare, el historiador clásico Luciano Canfora, de 81 años, está enfrentando un juicio por difamación agravada en Bari, Puglia. En abril de 2024, antes de que Meloni asumiera el cargo de primer ministro, Canfora describió a la política como "un neonazi en el fondo", lo que Meloni dijo que era "apto para distorsionar y falsificar su identidad política".

En otro caso penal de difamación que involucra al primer ministro, el escritor Roberto Saviano fue multado con 1.000 euros por difamar a Meloni y a Matteo Salvini, el líder de la Liga de extrema derecha, como "hijos de puta" en la televisión en 2024 por su veneno hacia los barcos administrados por ONG que rescatan personas en el Mediterráneo.

Una reforma de la ley de difamación sigue sin estar a la vista a pesar de una recomendación de la corte más alta de Italia, con el gobierno de Meloni posponiendo un debate parlamentario sobre un proyecto de ley supuesto para poner fin a la criminalización de periodistas y escritores acusados de difamación el mes pasado.

"En Italia, hemos visto demandas por difamación contra políticos y periodistas, pero esto es diferente", dijo Di Cesare. "Los intelectuales públicos como Saviano, Canfora o yo no tenemos la protección de un partido político o un periódico".

Según las cifras de la organización italiana de libertad de prensa Ossigeno per l'informazione, se presentan más de 5.000 juicios por difamación contra periodistas italianos cada año. El 90 por ciento se rechazan como infundadas.

"En Italia, la práctica de presentar denuncias por difamación se utiliza a menudo como un movimiento legal para disuadir o amenazar a los periodistas, quienes a menudo abandonan su informe mientras se encuentra bajo investigación", afirmó Alberto Spampinato, el fundador del grupo.

El informe anual de 2024 de la Plataforma para Promover la Protección del Periodismo y la Seguridad de los Periodistas del Consejo de Europa señaló que no hubo disminución en el uso de demandas estratégicas en Italia. "Italia no solo no despenalizó la calumnia, sino que su nuevo gobierno de coalición dio su bendición al uso de procedimientos judiciales para silenciar a sus críticos", dijo.

El informe citó un tuit de Guido Crosetto unos días después de que fuera nombrado ministro de Defensa en el que dijo: "Estoy convencido de que las condenas en procedimientos civiles y penales son el único método, en el caso de la difamación, que comprenden los editores, los editores y los periodistas" en respuesta a acusaciones de conflicto de intereses.

Un caso que involucra al periódico Domani fue remitido por Crosetto a los fiscales, quienes ordenaron al medio que revelara su fuente para artículos que afirmaban que había recibido pagos de la industria de armas. Como resultado, tres periodistas fueron colocados bajo investigación. En respuesta a las preguntas del Guardián sobre el uso estratégico de las demandas por difamación, Crosetto respondió: "No he demandado al periódico Domani o a los periodistas, sino que solo he pedido a la justicia que verifique cómo se publicaron datos no públicos y no obtenibles".

Guido Crosetto, ministro de Defensa de Italia. [1xbet quem é o dono](#)

Una carta abierta en apoyo de Di Cesare lanzada por cuatro profesores británicos en el Centro de Investigación de Filosofía Europea Moderna de la Universidad de Kingston en Londres argumentó que casos como el de ella eran evocativos de tácticas utilizadas en "democracias iliberales vacías" para silenciar a los opositores.

"Es inconcebible que en un país democrático un ministro arrastre a un filósofo a los tribunales sobre asuntos culturales y políticos y de naturaleza histórico-filosófica, sobre los que en cambio debería haber un debate democrático", dice la carta.

"Los funcionarios de un gobierno democrático deben responder a la crítica política incluso dura con palabras, no con demandas", dijo Di Cesare. "Soy una pacifista y una antirracista, pero estoy dispuesta a debatirlo".

O testemunho de Salah Al-Ejaili, um ex jornalista da al Jazeera que passou mais do mesmo mês **pixbet sede** Abu Ghraib (Abu Gharibe) no ano 2003, marca a primeira vez na história dos sobreviventes das prisões americanas.

Al-Ejaili e outros dois detidos Abu Ghraib estão processando a CACI, empresa militar sediada na Virgínia que acusava o grupo de contribuir para **pixbet sede** tortura enviando interrogadores civis como parte do contrato com um Exército. O processo cita evidências **pixbet sede** investigações governamentais segundo as quais os contratados da ACIC encorajaram policiais militares "atrapalhem" prisioneiros antes dos interrogatórios deles

O advogado do CACI, John o'Connor s reconheceu que alguns detidos de Abu Ghraib sofreram abusos horríveis mas ofereceram uma defesa **pixbet sede** três frente para a empresa na **pixbet sede** declaração inicial ao júri.

Informações do documento:

Autor: nationwidetransportation.com

Assunto: pixbet sede

Palavras-chave: **pixbet sede - nationwidetransportation.com**

Data de lançamento de: 2024-06-10